



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA

Tunja, veintiuno (21) de junio de dos mil dieciocho (2018)

MEDIO DE CONTROL: Ejecutivo – Medidas Cautelares
DEMANDANTE: Nury Patricia Vargas Alfonso
DEMANDADO: Departamento de Boyacá
RADICACIÓN: 150013333010-2015-00146-00.

ASUNTO

Se procede a resolver la solicitud de medidas cautelares elevada por la parte ejecutante, conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

Para efectos de procesos ejecutivos en la jurisdicción de lo contencioso administrativa, la Ley 1437 de 2011 no estableció un procedimiento especial, por lo que le son aplicables las disposiciones del Código General del Proceso, por remisión normativa del artículo 306 del CPACA., así las cosas, las medidas cautelares en este tipo de proceso se entienden reguladas por este cuerpo normativo.

Respecto al decreto de medidas cautelares de embargo y retención de bienes, el Código General del Proceso en su artículo 599 señala:

"Art. 599.- Embargo y secuestro. Desde la presentación de la demanda el ejecutante podrá solicitar el embargo y secuestro de bienes del ejecutado.

(...)

El juez, al decretar los embargos y secuestros, podrá limitarlos a lo necesario; el valor de los bienes no podrá exceder del doble del crédito cobrado, sus intereses y las costas prudencialmente calculadas, salvo que se trate de un solo bien o de bienes afectados por hipoteca o prenda que garanticen aquel crédito, o cuando la división disminuya su valor o venalidad.

(...)"

Por su parte, el artículo 593 ibídem, señala respecto al procedimiento para el decreto de embargo de sumas de dinero depositadas en establecimientos bancarios lo siguiente:

"Art. 593.- Embargos. Para efectuar embargos se procederá así:

(...)

10. El de sumas de dinero depositadas en establecimientos bancarios y similares, se comunicará a la correspondiente entidad como lo dispone el inciso 1º del numeral 4º, debiéndose señalar la cuantía máxima de la medida, que no podrá exceder del valor del crédito y las costas, más un cincuenta por ciento (50%). Aquéllos deberán constituir certificado de depósito y ponerlo a disposición del juez dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la comunicación; con la recepción del oficio queda consumado el embargo."

A su vez, el artículo 594 del mismo cuerpo normativo, enlista bienes inembargables, señalado en su párrafo a las excepciones al principio de inembargabilidad:

ARTÍCULO 594. BIENES INEMBARGABLES. Además de los bienes inembargables señalados en la Constitución Política o en leyes especiales, no se podrán embargar:

1. Los bienes, las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación o de las entidades territoriales, las cuentas del sistema general de participación, regalías y recursos de la seguridad social.

(...)

PARÁGRAFO. Los funcionarios judiciales o administrativos se abstendrán de decretar órdenes de embargo sobre recursos inembargables. En el evento en que por ley fuere procedente decretar la medida no obstante su carácter de inembargable, deberán invocar en la orden de embargo el fundamento legal para su procedencia.

Recibida una orden de embargo que afecte recursos de naturaleza inembargable, en la cual no se indicare el fundamento legal para la procedencia de la excepción, el destinatario de la orden de embargo, se podrá abstener de cumplir la orden judicial o administrativa, dada la naturaleza de inembargable de los recursos.

En tal evento, la entidad destinataria de la medida, deberá informar al día hábil siguiente a la autoridad que decretó la medida, sobre el hecho del no acatamiento de la medida por cuanto dichos recursos ostentan la calidad de inembargables. La autoridad que decretó la medida deberá pronunciarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de envío de la comunicación, acerca de si procede alguna excepción legal a la regla de inembargabilidad. Si pasados tres (3) días hábiles el destinatario no se recibe oficio alguno, se entenderá revocada la medida cautelar.

En el evento de que la autoridad judicial o administrativa insista en la medida de embargo, la entidad destinataria cumplirá la orden, pero congelando los recursos en una cuenta especial que devengue intereses en las mismas condiciones de la cuenta o producto de la cual se produce el débito por cuenta del embargo.

En todo caso, las sumas retenidas solamente se pondrán a disposición del juzgado, cuando cobre ejecutoria la sentencia o la providencia que le ponga fin al proceso que así lo ordene." Negrilla del Despacho.

En este orden de ideas, el numeral 1 del artículo 594 del C.G.P., les dio el carácter de inembargables a los recursos económicos que integran el presupuesto general de las entidades territoriales, sin embargo, mediante este texto legal, también se incorpora a la ley formal criterio desarrollado jurisprudencialmente, consistente en que la inembargabilidad de recursos públicos no es absoluta, ya que admite excepciones derivadas del mismo ordenamiento jurídico. La Corte Constitucional al estudiar entre otras la norma transcrita en sentencia C-543 de 2013¹, señaló:

".. El artículo 63 de la Constitución dispone que "Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables"

*A la luz del anterior precepto debe entenderse que además de los bienes señalados expresamente en éste, el **Constituyente le otorgó al legislador la facultad para determinar, entre otros, los bienes que tienen naturaleza de inembargables, del cual también se deriva el sustento constitucional del principio de inembargabilidad presupuestal.***

*Por su parte, la Corte Constitucional, al fijar el contenido y alcance del artículo 63 sobre el tema en discusión, ha sostenido que **el principio de inembargabilidad es una garantía que se hace necesario preservar y defender, con el fin de proteger los recursos financieros del Estado, en particular, los destinados a cubrir las necesidades esenciales de la población. Esto, por cuanto si se permitiera el embargo de todos los recursos y bienes públicos (i) el Estado se expondría a una parálisis financiera para realizar el cometido de sus fines esenciales, y (ii) se desconocería el principio de la prevalencia del interés general frente al particular, el artículo 1 y el preámbulo de la Carta Superior***².

¹ Magistrado Ponente JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

² Corte Constitucional, sentencia C-546 de 1992, Magistrados Ponentes: Ciro Angarita Baron y Alejandro Martínez Caballero.

Sin embargo, **contempló excepciones a la regla general para armonizar el principio de inembargabilidad de recursos públicos con otros principios, valores y derechos constitucionales**, entre los que se encuentran, la dignidad humana, la vigencia de un orden justo y el derecho al trabajo. Éstas son:

- (i) *Satisfacción de créditos u obligaciones de origen laboral con el fin de hacer efectivo el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas*³.
- (ii) **Pago de sentencias judiciales para garantizar la seguridad jurídica y la realización de los derechos en ellas contenidos**⁴.
- (iii) *Títulos emanados del Estado que reconocen una obligación clara, expresa y exigible*.⁵
- (iv) **Las anteriores excepciones son aplicables respecto de los recursos del SGP, siempre y cuando las obligaciones reclamadas tuvieran como fuente alguna de las actividades a las cuales estaban destinados dichos recursos (educación, salud, agua potable y saneamiento básico)**⁶

*Esta posición ha sido reiterada por la Corporación, sin que haya declarado la inexecutable de las normas referentes a la inembargabilidad de bienes y recursos públicos*⁷...” Negrillas fuera del texto original.

Así entonces el Máximo Tribunal Constitucional, al estudiar entre otras normas, el mandato dispuesto en el citado artículo 594, estableció la importancia del principio de inembargabilidad de los recursos públicos, en la medida que, estos tienen como fin garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de la población, y permitir su embargo indiscriminado resultaría el perjuicio del interés general, no obstante, como se dijo- jurisprudencialmente se han determinado excepciones a tal inembargabilidad cuando esta choca con otros valores y principios superiores, tema objeto de un estudio más profundo por parte de la Corte en la sentencia C 1154 de 2008, donde se explica ampliamente el fundamento de cada una de ellas, en resumen al respecto encontramos:

- La primera excepción tiene que ver con la **necesidad de satisfacer créditos u obligaciones de origen laboral** con miras a efectivizar el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, y obedece a prevalencia del derecho de los trabajadores a la efectividad del pago de su salario, toda vez que, el derecho al trabajo, por su especial protección en la Carta y por su carácter de valor fundante del Estado social de derecho, merece una especial protección respecto de la inembargabilidad del presupuesto; criterio que apunta a la realización efectiva de derechos laborales reconocidos en sentencia judicial o en actos administrativos que así lo dispongan en forma inequívoca.
- La segunda regla de excepción tiene que ver con **el pago de sentencias judiciales** para garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos en dichas providencias, *“bajo el entendido de que los créditos a cargo del Estado, bien sean que consten en sentencias o en otros títulos legalmente válidos, deben ser pagados mediante el procedimiento que indica la norma acusada y que transcurridos 18 meses después de que ellos sean*

³ C-546 de 1992

⁴ En la sentencia C-354 de 1997 (Antonio Barrera Carbonell), se expuso que aunque el principio general de inembargabilidad que consagra la norma acusada resultaba ajustada a la Constitución. Precisó que tratándose de los créditos a cargo del Estado, bien sean que consten en sentencias o en otros títulos legalmente válidos, deben ser pagados mediante el procedimiento que indica la norma acusada y que transcurridos 18 meses después de que ellos sean exigibles, es posible adelantar ejecución, con embargo de recursos del presupuesto -en primer lugar los destinados al pago de sentencias o conciliaciones, cuando se trate de esta clase de títulos- y sobre los bienes de las entidades u órganos respectivos.

⁵ La sentencia C-103 de 1994 (Jorge Arango Mejía), se estableció una segunda excepción a la inembargabilidad del Presupuesto General de la Nación, así: para hacer efectiva una obligación que conste en un acto administrativo que preste mérito ejecutivo, esto es, que sea expresa, clara y exigible, procederá la ejecución después de los diez y ocho (18) meses.

⁶ C-793 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño

⁷ La línea jurisprudencial que desarrolla lo atinente al principio de inembargabilidad de los bienes y recursos públicos como sus excepciones está compuesta, principalmente, por las siguientes sentencias: C-546 de 1992, C-013, C-017, C-107, C-337, C-555 de 1993, C-103 y C-263 de 1994, C-354 y C-402 de 1997, T-531 de 1999, C-427 de 2002, T-539 de 2002, C-793 de 2002, C-566, C-871 y C-1064 de 2003, C-192 de 2005, C-1154 de 2008 y C-539 de 2010.

exigibles, es posible adelantar ejecución, con embargo de recursos del presupuesto -en primer lugar los destinados al pago de sentencias o conciliaciones, cuando se trate de esta clase de títulos- y sobre los bienes de las entidades u órganos respectivos” (Subrayas del Juzgado).

- Finalmente, la tercera excepción a la cláusula de inembargabilidad del Presupuesto General de la Nación, **se origina en los títulos emanados del Estado que reconocen una obligación clara, expresa y exigible**, pues los créditos creados por el Estado a través de los modos o formas de actuación administrativa que regula la ley tienen tanto valor como los reconocidos a través de sentencias.

CASO CONCRETO

Revisado el expediente se encuentra con escrito de 15 de diciembre de 2016, (fl. 1 cdno cautelares), la apoderada de la ejecutante solicitó decretar el embargo y secuestro de la tercera parte de las rentas brutas del departamento de Boyacá, de los siguientes recursos:

- a. Los tributarios tales como: los impuestos directos: llamase predial y comercio, circulación y tránsito.
- b. Los no tributarios, tales como: las tasas las contribuciones sobre las tasas a la gasolina, complementarios, los de industria y comercio, pesas y medidas, avisos, espectáculos públicos, etc.
- c. Las otras rentas tales como: multas, arrendamientos de bienes del departamento de Boyacá, intereses moratorios sobre impuestos municipales, facturación de servicios administrativos, licencias, certificación de documentos, ruptura de vías, etc.

De igual modo, solicitó oficiar a los bancos: Banco Agrario de Colombia, Banco Popular, Bancolombia, Banco de Occidente, Banco de Bogotá, Banco Caja Social, Banco Davivienda, Banco AV-Villas, Banco Colpatria, en los términos de los numerales 4, 10 y parágrafo 2 del artículo 593 del C.G.P, así como el artículo 594 ibídem, y se proceda al embargo de los dineros que se encuentren a nombre de la entidad demandada.

Con auto de 19 de enero de 2017 se dispuso oficiar al Secretario de Hacienda del Departamento de Boyacá, para que certificara cual es la tercera parte de la renta embargable, así como los números de cuentas y las entidades financieras donde se encuentran depositados tales recursos, así como oficiar a las descritas entidades financieras para que certifiquen si las rentas y recursos depositados en las cuentas corrientes o de ahorros, títulos valores CDTs de las que es titular el Departamento de Boyacá, tienen carácter inembargable.

Como respuesta el Tesorero General del Departamento señaló que “...es incierto establecer con exactitud la tercera parte de la renta bruta embargable...adicionalmente hay diferentes destinaciones para los dineros que ingresan al presupuesto General del Departamento, lo cual conlleva a convertirlos en bienes inembargables por dárseles uso con fines sociales en la forma como establecen los artículos 63 y 356 de la Constitución de 1991...” (fl. 43 cdno cautelares) (Subrayas del Despacho.) .

Por su parte los bancos: Popular, Occidente, Caja Social, BBVA, Davivienda, Bogotá, Agrario de Colombia, Bancolombia, AV Villas y Colpatria allegaron las respectivas certificaciones proferidas por el Tesorero General del Departamento de Boyacá, donde se indica la **inembargabilidad de los recursos depositados** en las cuentas de estos bancos y que son de titularidad del ente territorial.

De conformidad con lo anterior y teniendo en cuenta que las cautelas solicitadas recaen sobre recursos pertenecientes al presupuesto general del Departamento, debe ahora el juzgado ocuparse en determinar si el crédito que nos ocupa se encuentra enmarcado en alguna de las excepciones arriba enunciadas y así establecer o no la procedencia de la misma.

Para tal efecto es preciso recordar que, desde el libelo demandatorio lo pretendido por la demandante era que se ordenara el pago de sumas de dinero adeudas *"por concepto de intereses moratorios faltantes sobre cada una de las sumas resultantes desde el momento en que cobro ejecutoria la sentencia proferida el 3 de septiembre de 2013 FECHA EJECUTORIA y hasta el 11 de diciembre de 2014 FECHA DE PAGO..."* (fl. 6).

De conformidad con esta pretensión mediante auto del 5 de octubre de 2015 (fls. 67-70) se libra mandamiento de pago contra el Departamento de Boyacá por concepto de: *"los intereses moratorios faltantes, causados desde la ejecutoria del fallo de segunda instancia proferido por el Tribunal Administrativo de Boyacá (3 de septiembre de 2013) hasta la fecha de pago de la obligación (11 de diciembre de 2014) liquidados a la tasa máxima permitida por la ley. Descontando las sumas ya canceladas por la ejecutada por este concepto"*.

En la audiencia inicial de que trata el artículo 372 del C.G.P celebrada de 27 de abril de 2016, se decidió *"seguir adelante con la ejecución en la forma ordenada en el mandamiento de pago"* (fls 123-125)

Entonces, considerando que el cobro jurídico que nos ocupa se dirige única y exclusivamente al pago de un saldo de los intereses moratorios adeudados por la entidad ejecutada, debe establecerse si los referidos conceptos se encuentran dentro de la excepción a la inembargabilidad referente al **pago de sentencias judiciales**, para tal fin, es preciso traer a colación pronunciamiento efectuado por el Tribunal Administrativo de Boyacá⁸, donde al resolver un caso de similares contornos al que nos ocupa, estimó:

*"Al respecto ha de indicar el Despacho que si bien la Corte Constitucional estableció como una de las excepciones al principio de inembargabilidad de los recursos, bienes y rentas incorporados en el presupuesto general de la Nación o de las Entidades Territoriales, así como los recursos del Sistema General de Participaciones, el pago de sentencias judiciales, lo cierto es que **tal excepción encuentra su fundamento y por tanto su operatividad, en tanto, la misma sea necesaria para garantizar la seguridad jurídica, y el respeto de derechos reconocidos a las personas en dichas sentencias.***

*En otras palabras, la segunda de las excepciones fijadas por la Corte Constitucional, esto es, el pago de sentencias judiciales, **resulta aplicable en el evento en que los créditos a cargo del Estado no sean oportunamente cancelados, de tal forma que la aplicación de la referida excepción tendrá lugar en el evento en que sea necesario garantizar el cumplimiento de los derechos consagrados, en la sentencia judicial, logrando con esto, la seguridad jurídica de las partes involucradas.***

(...)

*En tal sentido, concluye la Sala que en el presente caso no se cumple con las condiciones requeridas a efectos de dar aplicación a una de las excepciones al principio de inembargabilidad, como lo es, es pago de sentencias judiciales, toda vez que con la aplicación de dicha excepción no se pretende garantizar la seguridad jurídica de las partes así como tampoco el respeto de los derechos allí reconocidos, ello por cuanto, tal como quedó visto en precedencia los Departamentos de Boyacá y Santander ya realizaron el pago del derecho principal contenido en el Laudo Arbitral, **quedando únicamente pendiente el pago de los intereses moratorios, los cuales como se verá a continuación,***

⁸ Tribunal Administrativo de Boyacá, Despacho No. 6, auto de 22 de noviembre de 2017. Radicado 15001333300820140051600, Magistrado Ponente: Oscar Alfonso Granados Naranjo.

resultan ser accesorios en tanto operan ante el incumplimiento de la obligación principal.

A juicio del Despacho el cobro de los intereses moratorios, objeto actual del presente proceso, no se enmarca dentro de las excepciones fijadas por la Corte Constitucional a fin de posibilitar la embargabilidad de los recursos de las entidades ejecutadas, los cuales son inembargables en tanto forman parte del presupuesto general de las Entidades Territoriales o recursos transferidos por el Sistema General de Participaciones, en la medida en que no se enmarca en ninguna de las excepciones vistas en precedencia.

En efecto, los intereses moratorios han sido entendidos por la doctrina como la indemnización de perjuicios que debe satisfacer el deudor cuando ha incurrido en mora de pagar la cantidad debida; en otras palabras, es una forma de reparar el daño sufrido por el acreedor ante el incumplimiento tardío del deudor⁹.

(...)

A su turno, el Consejo de Estado¹⁰ define los intereses moratorios como aquellos que se causan cuando la obligación no se cumple en el momento pactado y su objeto es indemnizar los perjuicios que se ocasionan al acreedor por el incumplimiento de la obligación principal, figura que se encuentra contenida en el artículo 177 del C.C.A. hoy artículo 192 del C. PACA.

Aunado a lo anterior, advierte el Despacho que el **apoderado de la parte demandante dentro de los escritos en donde solicita el embargo y secuestro de los recursos, bienes y rentas de los Departamentos de Boyacá y Santander únicamente se limita a hacer referencia de manera general a los bienes que puedan estar en cabeza de dichas entidades y que estén contenidos en cuentas de diferentes establecimientos bancarios; no obstante, siendo carga procesal de la parte que solicita el decreto de las medidas cautelares, no se especifica cuáles de las cuentas bancarias contienen recursos que por su naturaleza sean embargables, así como tampoco se indica cuales recursos, bienes y rentas no contenidos en entidades financieras, no gozan del principio de inembargabilidad.**” Negrillas del Juzgado.

La enunciada postura del Superior Funcional será acogida por este estrado judicial, y en consecuencia, como las medidas cautelares peticionadas por la parte ejecutante recaen sobre el presupuesto general del departamento, y buscan asegurar el pago de intereses moratorios, es palmario que las mismas no son procedentes, como quiera que:

- Como arriba se plasmó desde el libelo demandatorio existe claridad en que lo pretendido y por lo que ordeno seguir adelante la presente ejecución es el pago de saldo insoluto de intereses adeudados en razón al cumplimiento de un fallo judicial.
- Las entidades bancarias oficiadas fueron unánimes en señalar que los recursos depositados por el Departamento son de naturaleza inembargable, y a pesar de los requerimientos efectuados con autos de 19 de enero, 30 de marzo y 27 de julio de 2017 (fl. 3, 77 y 83-84 cdno cautelares.), fue imposible establecer una cuenta con recursos embargables o en su defecto alguna cuyos fuente de recursos sea la misma que la de la obligación que se reclama conforme lo estipula la citada sentencia C-543 de 2013¹¹.

⁹ VILLEGAS, Carlos A., SHUJMAN, Mario S., Intereses y Tasas, Ediciones Abe edo-Perrot, 1990, Pág. 135.

¹⁰ Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, C.P. Oscar Dario Amaya Navas. Rad: 11001-03-06-000-2016-00087-00. Fecha: 10 de octubre de 2016.

¹¹ “ iv) Las anteriores excepciones son aplicables respecto de los recursos del SGP, siempre y cuando las obligaciones reclamadas tuvieran como fuente alguna de las actividades a las cuales estaban destinados dichos recursos (educación, salud, agua potable y saneamiento básico)”¹¹ (Subrayas fuera del texto)

- Los intereses moratorios no se encuentran cobijados por la excepción a la inembargabilidad de los recursos públicos por el pago de sentencias judiciales, dada su naturaleza accesoria e indemnizatoria, la cual no tiene relación directa con el principio a la seguridad jurídica que pretende proteger, por lo que prevalece el interés general que asegura la imposibilidad de embargar dineros públicos cuya objeto es la satisfacción de las necesidades básicas de toda la población.
- Es del caso resaltar que la solicitud de embargo vista en el folio 1 del cuaderno de medidas cautelares carece de sustento fáctico y jurídico, además la entonces apoderada de la parte actora, se limitó a enunciar una serie de entidades bancarias a efectos de que el despacho las oficiara, desconociéndose el carácter rogado de la justicia contenciosa administrativa y sustrayéndose de su deber de pedir al juzgado el embargo y retención de dineros de una institución financiera y una cuenta específicas, donde tal medida fuera procedente. A pesar de dicha circunstancia se propendió a través de autos y expedición de oficios lograr determinar la existencia dineros cuyo titular sea el ejecutado sean de carácter embargable, sin obtener respuestas positivas, pues como se puede ver a lo largo del expediente todos los recursos depositados en los bancos oficiados están incorporados al Presupuesto General del Departamento y por ende protegidos por el mandado de inembargabilidad del numeral 1 del artículo 594 del Código General del Proceso.

En suma, como no se determinó la existencia de recursos embargables, por el contrario la totalidad de los productos financieros con los que cuenta el Departamento de Boyacá en los Bancos relacionados en la solicitud de cautela hacen parte del presupuesto general del departamento y por tanto, tienen naturaleza inembargable, como se indicó tampoco fue posible la determinación la tercera parte de las rentas brutas del departamento como lo pretende el accionante y la obligación que se pretende cobrar corresponde al saldo de los intereses moratorios, los cuales no hacen parte de la excepción por pago de sentencias judiciales u otra de las establecidas por la Jurisprudencia de la Corte Constitucional, las medidas cautelares será negadas.

Otras determinaciones.

Mediante escrito radicado el 29 de noviembre de 2017 (fl. 175), la abogada JESSICA VIVIANA ROBLES LÓPEZ manifiesta que renuncia al poder a ella otorgado por la Asociación jurídica Especializada S.A.S, mandataria de la demandante, NURY PATRICIA VARGAS ALFONSO, acompañando la correspondiente comunicación recibida por el poderdante (fl. 176); por reunir los requisitos dispuestos para la terminación del poder de conformidad con el artículo 76 del Código General del Proceso, se aceptara la renuncia presentada por la profesional del derecho.

Adicionalmente se encuentra que a folio 178 del expediente obra poder especial conferido por la Asociación jurídica Especializada S.A.S, en favor del abogado FREDY ALBERTO RUEDA HERNÁNDEZ identificado con cédula de ciudadanía N° 7.176.000 y Tarjeta profesional de abogado N° 285.116, respecto del cual se reconoce personería a este profesional del derecho, como apoderado especial de la parte demandante.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Cuarto Administrativo de Oralidad del Circuito de Tunja,

RESUELVE:

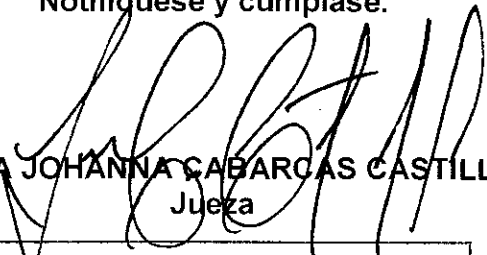
PRIMERO: NEGAR las medidas cautelares solicitadas por la parte ejecutante consistentes i) el embargo y secuestro de la tercera parte de las rentas brutas del Departamento de Boyacá y ii) el embargo y retención de dineros de los recursos que se encuentren a nombre del Departamento de Boyacá en los bancos: Agrario de

Colombia, Popular, Bancolombia, Occidente, Bogotá, Caja Social, Davivienda, AV-Villas y Colpatria, de acuerdo a lo expuesto en precedencia.

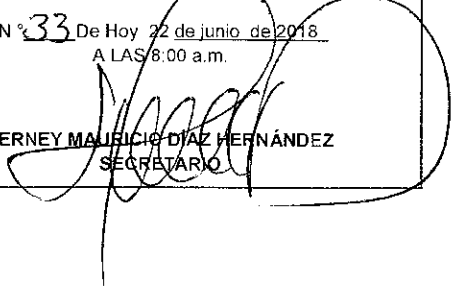
SEGUNDO.- ACEPTAR LA RENUNCIA de la abogada **JESSICA VIVIANA ROBLES LÓPEZ** como apoderado judicial de la demandante **NURY PATRICIA VARGAS ALFONSO** de conformidad con lo manifestado en memorial del 29 de noviembre de 2017.

TERCERO .- RECONOCER PERSONERÍA a la abogada **FREDY ALBERTO RUEDA HERNÁNDEZ** identificada con cédula de ciudadanía N° 7.176.000 y Tarjeta profesional de abogado N° 285.116 del C. S. de la J, como apoderado de la parte demandante, según poder obrante a folio 178.

Notifíquese y cúmplase.


LAURA JOHANNA CABARCAS CASTILLO
Jueza

Cesco 12

<p>JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA</p> <p>NOTIFICACIÓN POR ESTADO</p> <p>LA ANTERIOR PROVIDENCIA SE NOTIFICA POR ESTADO ELECTRÓNICO</p> <p>N° <u>33</u> De Hoy <u>22 de junio de 2018</u> A LAS 8:00 a.m.</p> <p> FERNEY MAURICIO DÍAZ HERNÁNDEZ SECRETARIO</p>

¹² Esta providencia fue notificada en estado electrónico el 22 de junio de 2018 en la página web www.ramajudicial.gov.co. Ferney Mauricio Díaz Hernández – Secretario